



**MINUTA DE LA 20a –VIGÉSIMA - SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2024-DOS MIL
VEINTICUATRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 16:30 horas del día 27 de agosto de 2024-dos mil veinticuatro, se encuentran el Lic. Iván Salazar Guajardo, Director Jurídico Consultivo, la Lic. Deniss Guadalupe González Galván, Directora de Asuntos Legislativos, y el Lic. Ramiro González Galvan, Coordinador de Transparencia, Integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con el Acuerdo de Integración del Comité en cita, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19-diecinueve de octubre de 2016 - dos mil dieciséis.

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO. Análisis de la determinación en materia de ampliación de plazo de respuesta emitida por el Enlace de Información de la Dirección de Protección Civil respecto a la solicitud de acceso a la información con número de folio **191109124000329**.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

1

I. ANTECEDENTES:

PRIMERO: En fecha 14 de agosto de 2024, se recibió por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso la Información (SISAI) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud registrada con el folio 191109124000329, a través de la cual el solicitante requirió diversa información, incluyendo copias en forma electrónica de las **bitácoras de vuelo de los helicópteros de ALTIX AERO S.A. DE C.V. que dieron servicio a la Dirección de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno desde el año 2021 a la fecha.**

SEGUNDO: Tras lo anterior, el Enlace de información de la Dirección de Protección Civil pone a consideración de este Comité de Transparencia la determinación de ampliación de plazo de respuesta debido al cúmulo de información que obra en su acervo documental correspondiente a la solicitud de información.

Por lo anterior expuesto y,

II. CONSIDERANDO:

PRIMERO: El Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 13 y 162 fracción I de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 44, fracción II de la Ley General de





**GENERAL DE
GOBIERNO**
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO



Transparencia y Acceso a la Información Pública y 57 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en lo sucesivo Ley de Transparencia y 3, fracción II del Acuerdo por el que se Crea el Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno.

SEGUNDO: Que el artículo 6, apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con los diversos 10, 13 y 162 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establecen que el derecho a la información consiste en solicitar documentos en poder de las autoridades que se deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

TERCERO: Que la Dirección de Protección Civil se encuentra adscrita a la Secretaría General de Gobierno conforme a los artículos 18 fracción I y 22 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 4 fracción II y 5 fracción I inciso b) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, por lo que se considera un sujeto obligado de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Transparencia.

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 3 fracción XXI de la Ley de Transparencia el Enlace de Información es el servidor público designado expresamente por los titulares de cualquier sujeto obligado, como responsables del trámite de las solicitudes de acceso a la información pública y las relativas a los datos personales.

QUINTO: Que el artículo 157 de la Ley de Transparencia dispone en su párrafo segundo lo siguiente: *"Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento."* Por lo que, al estar motivada la determinación del sujeto obligado en el cúmulo de la información que obra en su poder y que es de interés del particular y al tener que someter los documentos requeridos a un análisis de su contenido, es procedente confirmar su determinación.

III. RESULTANDO:

Que el proceso deliberativo de este Comité de Transparencia se sustenta en el principio de legalidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que prescribe que las actuaciones de las autoridades deben efectuarse dentro del marco de sus facultades legales.

Que todo acto de autoridad que respete el principio de legalidad, estando debidamente fundado y motivado, se considera que brinda certeza al particular de que sus actos son legítimos. Por tanto, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una





facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional.

Sirve para ampliar lo anterior la siguiente tesis aislada:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Así también, el presente instrumento se fundamenta en el principio de presunción de legitimidad del acto administrativo; que expresa que el acto administrativo debe tenerse por válido mientras no llegue a declararse por autoridad competente su invalidez, es decir, que se trata de una presunción *iuris tantum*.

Por lo que una vez concluido el análisis de la solicitud de ampliación de plazo sometida a consideración de este Comité para su estudio, y en atención en que es del interés del sujeto obligado





**GENERAL DE
GOBIERNO**

GABINETE DE
BUEN GOBIERNO



entregar información que incide dentro del ámbito de interés del particular, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 fracción II de la Ley de Transparencia, que establece que corresponde al Comité de Transparencia "Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados", y en virtud de los argumentos jurídicos expuestos, este comité:


RESUELVE

- **ÚNICO.** Se **CONFIRMA** por unanimidad la determinación de ampliación de plazo de respuesta de la solicitud de información **191109124000329**.

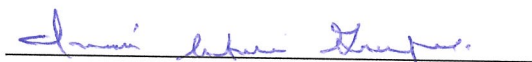
Sin otro asunto que tratar, siendo las 17:15 horas del día 27 de agosto de 2024-dos mil veinticuatro, se declara cerrada la sesión concluyendo así la presente minuta.



Lic. Ramiro González Galván
Coordinador de Transparencia



Lic. Deniss G. González Galván
Directora de Asuntos Legislativos



Lic. Iván Salazar Guajardo
Director Jurídico Consultivo

